



**GUADALAJARA, JALISCO, 17 DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO
2021 DOS MIL VEINTIUNO.**

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARIA DE SEGURIDAD, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA y SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO.**

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 10 diez de febrero del año 2020 dos mil veinte, [REDACTED], por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 12 doce de febrero del año 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda, consistentes en:

- Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio **172261582, 172827993, 221570820, 222387191, 223688241, 223856373, 228705969, 231827102, 201042313, 243454930, 237757270, 238601746, 254072850, 254084654, 254126918, 201838762, 263862562, 267486310, 207778494, 301824211, 271400942, 271647271, 293708770, 302329508 y 273204881**, emitidas por la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad;
- Refrendo Anual de Placas Vehiculares de los años 2013 dos mil trece al 2020 dos mil veinte y sus accesorios, entre ellos los créditos fiscales números 13004376677, 15004086793 y 18004513169, así como el requerimiento con número de folio M618004134408, de la Secretaría de la Hacienda Pública.

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió y requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Por acuerdo de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2020 dos mil veinte, se tuvo a las autoridades produciendo contestación a la demanda, oponiendo excepciones, defensas y causal de improcedencia; de igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas, desahogándose aquellas que su naturaleza lo permitió y, toda vez que no exhibieron los actos reclamados, se hizo efectivo el apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones que el actor pretendía



demostrar con su exhibición. De lo anterior, se ordenó dar vista a la accionante para que ampliara su demanda.

4.- En actuación del 14 catorce de diciembre del año 2020 dos mil veinte, se tuvo a la actora ampliando su demanda, de lo que se ordenó correr traslado a su contraria para que produjera contestación, lo cual realizó, por lo que el día 15 quince de junio del año 2021 dos mil veintiuno, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 22 veintidós a 27 veintisiete, 45 cuarenta y cinco y 63 sesenta y tres a 71 setenta y uno del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción VI, 336, 337, 399 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede analizar las causales de improcedencia que hace valer la demandada, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo de 1991 mil novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: *“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”*.

a) La Secretaría de la Hacienda Pública, antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, señala que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IX del numeral 29, en relación con los artículos 1º, ambos de la Ley de la Materia, a virtud que *el pago del refrendo se encuentra previsto*



en una norma de carácter general emitida por el Congreso del Estado, por lo que no es impugnabile ante este Tribunal.

La causal de improcedencia en análisis **se desestima**, toda vez que la misma encierra cuestiones que guardan relación con el fondo de la litis, las cuales serán tratadas por este juzgador en el Considerando siguiente, por lo que no es dable, por técnica jurídica en el pronunciamiento de la presente sentencia, el avocarse al estudio de los argumentos contenidos en la causal de mérito, cuando los mismos serán tratados con posterioridad. Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, localizable en la página 5 cinco, Tomo XV, enero de 2002 dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjectables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”

b) No obstante, este Juzgador advierte de oficio la actualización de la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, tomando en consideración que la autoridad demandada notificó los créditos fiscales números 13004376677 y 15004086793 generados por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de los ejercicios fiscales 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce, y sus accesorios, respecto al vehículo con número de placas [REDACTED] y el diverso 18004513169 generado por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del año 2018 dos mil dieciocho, respecto al vehículo con número de placas [REDACTED], al accionante mediante los Requerimientos con números de folio **M418004213797, M413004124171 y M415004028279**, así como las respectivas Actas Circunstanciadas de Notificación y sus Citorios, en dichas anualidades, siendo la última notificación con fechas 27 veintisiete y 26 veintiséis de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, documentos visibles a fojas 63 sesenta y tres a 71 setenta y uno del Sumario y que merecen valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 329, fracción VI y 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria, mismos que no fueron combatidos por el promovente por cuanto a su notificación, toda vez que en su escrito de ampliación de demanda únicamente aduce cuestiones sobre indebida fundamentación y motivación, sin desvirtuar que con los días antes señalados, se hicieron de su conocimiento los créditos impugnados, por lo que a la fecha de presentación del escrito inicial, el día 10 diez de febrero del año 2020 dos mil veinte, había transcurrido en exceso el término de 30 treinta días establecido en el artículo 31 de la Ley de la Materia, **consintiendo tácitamente la notificación de los créditos fiscales en comento.**

De ahí que, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 30, fracción I y último párrafo y 74, fracción III, **se decreta el sobreseimiento** del presente juicio, únicamente por lo que ve a los créditos fiscales números 13004376677 y



15004086793 generados por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de los ejercicios fiscales 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce, y sus accesorios, respecto al vehículo con número de placas [REDACTED] y el diverso 18004513169 generado por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del año 2018 dos mil dieciocho y sus accesorios, respecto al vehículo con número de placas [REDACTED], al resultar extemporánea la presentación de la demanda.

IV.- Precisado lo anterior, procede analizar la litis planteada por las partes, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro “*CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.*” los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación.

V.- Atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, para lo cual, la parte actora alega en su primer concepto de impugnación que *los actos reclamados no se encuentran debidamente fundados y motivados, debiendo declarar su nulidad.*

Visto lo argumentado por las partes, se determina que le asiste la razón al promovente, atento a los siguientes razonamientos legales.

Primeramente, por lo que ve a la Cédula de Notificación de Infracción con número de folio 243454930 emitida por la Secretaría de Seguridad, del contenido de la constancia en que se encuentra inmerso el acto administrativo combatido, no se desprende que la autoridad demandada haga una vinculación de la conducta del infractor con la legislación violada, lo que genera un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; sin embargo, este no puede apreciarse aisladamente, sino que, como parte del orden jurídico que conforma, debe interpretarse armónicamente, en atención al principio de unidad del acto administrativo impugnado, del cual se advierte que de ninguna manera cumple con la formalidad a que alude el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)”

Al respecto, el citado dispositivo establece de manera imperativa que todo acto de autoridad sea emitido cumpliendo con tal exigencia, es decir que funde y



motive la causa legal del procedimiento, lo anterior encuentra sustentado en la Tesis XXI. 1o. 90 K, localizable en la página 334 trescientos treinta y cuatro, Tomo XIV, septiembre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido, pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.”

De lo anterior se infiere que, para que un acto administrativo se considere debidamente fundado y motivado, máxime en tratándose de uno emitido de manera unilateral y que cause agravio a un perjudicado, como el que nos ocupa, debe reunir ciertos elementos de validez, entre los cuales se encuentra precisamente, el contener una debida fundamentación y motivación por parte de la autoridad que lo emite, siendo ésta la única forma en que el acto de molestia proporcione seguridad jurídica al gobernado para todos los efectos legales conducentes, incluso los inherentes a la responsabilidad de la misma.

Por lo que resulta fundado el alegato relativo a la indebida fundamentación y motivación de las infracciones en cuestión, a virtud que, si bien se estableció únicamente lo siguiente: ***“NO RESPETAR EL DERECHO ESTABLECIDO PARA EL PASO DE PEATONES EN LA VÍA DE CIRCULACIÓN O INVADA ZONA PEATONAL”***; de lo anterior, no se advierten las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para llegar a esa conclusión, es decir, no se señaló cómo es que se cercioró que el supuesto infractor se encontraba en las hipótesis normativas, así como las ***circunstancias de modo tiempo y lugar, aunado a que cita dispositivos sin señalar con precisión a que legislación se refiere, máxime que no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables para cumplir con la exigencia constitucional de fundamentar y motivar debidamente el acto de autoridad, por lo que se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos impugnados.*** A lo anterior cobran aplicación por las razones que sustenta, la Jurisprudencia visible en la página 43 cuarenta y tres, del tomo 64 sesenta y cuatro, abril de 1993 mil novecientos noventa y tres, Octava Época, así



como la Jurisprudencia consultable en la página 1964 mil novecientos sesenta y cuatro, Tomo XXVII, febrero de 2008 dos mil ocho, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente disponen:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. en materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.”

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos insitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que,



advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.”

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, en relación con el ordinal 75, fracción II, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos impugnados consistentes en la Cédula de Notificación de Infracción con número de folio 243454930 emitida por la Secretaría de Seguridad, al contravenir disposiciones aplicables vigentes. Cobra aplicación al presente criterio, la Tesis I.3o.A.593 A, visible en la página 235 doscientos treinta y cinco, Tomo XV-1, febrero de 1995 mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

“NULIDAD. ES PROCEDENTE LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO ANTE LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION RESPECTO AL ORIGEN DE LOS CREDITOS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DE FONDO DEL ASUNTO. Para saber si se está en los supuestos de la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, o en los de la fracción IV del mismo artículo, resulta necesario distinguir entre la falta de fundamentación y motivación que se pudiera advertir en la resolución reclamada, que contiene los créditos impugnados, y la falta de fundamentación y motivación de los créditos en sí mismos, cuando ésta se origina con el desconocimiento de los datos, elementos o documentos en que la autoridad se apoya para emitir la misma. En el primer caso, y siempre que la resolución se haya emitido en un procedimiento en el que por su naturaleza el particular hubiera tenido la oportunidad de oponer defensas o excepciones, la omisión de fundar y motivar implica que se afecten las defensas del particular, y que ésta trascienda al resultado de la resolución emitida por la autoridad, por lo que, al cometerse una violación formal, procede declarar la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución contra la cual el gobernado pueda hacer valer, eventualmente, sus defensas. Sin embargo, en el segundo caso, es decir, cuando la resolución impugnada no ha sido emitida dentro de un procedimiento fiscal y, el contribuyente no tiene conocimiento de los fundamentos y motivos que justifican los créditos fincados en su contra, estamos frente a violaciones de fondo y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues por un lado los hechos y fundamentos que motivaron los créditos fiscales no fueron conocidos por el interesado, ni quedaron demostrados en cuanto a su existencia jurídica y, por otro lado, no es posible obligar a la autoridad a que haga uso de sus



facultades de fiscalización, dado que ésta, en ejercicio de sus atribuciones podrá o no hacerlo. En otras palabras, para que proceda la nulidad para efectos, es menester que no se analice el fondo de la resolución impugnada, es decir, basta con que existan vicios formales en la tramitación o resolución reclamada. En cambio, si se analiza el fondo de la cuestión alegada, y se estima que la resolución en sí misma es ilegal porque no se ajusta a derecho al dictarse en contravención de disposiciones normativas, la nulidad del acto debe ser lisa y llana.”

Respecto a los diversos folios emitidos por la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, tomando en consideración que éstas no exhibieron los actos que se les imputan, se determina que le asiste la razón a la actora, a virtud que mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2020 dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento a las autoridades demandadas respecto a tener por ciertas las afirmaciones que la accionante pretendía acreditar con la exhibición de los actos reclamados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio **172261582, 172827993, 221570820, 222387191, 223688241, 223856373, 228705969, 231827102, 201042313, 237757270, 238601746, 254072850, 254084654, 254126918, 201838762, 263862562, 267486310, 207778494, 301824211, 271400942, 271647271, 293708770, 302329508 y 273204881**, emitidas por la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, -los cuales dichas demandadas omitieron acompañar al juicio que nos ocupa, pese haber sido legalmente requeridas por esta Sala Unitaria- por cuanto a la ilegalidad de la misma. En consecuencia, al no demostrar el mandamiento por escrito, debidamente fundado y motivado, para sancionar a la promovente, se viola en su perjuicio las garantías previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con las fracciones I y III del numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, pues, tomando en consideración la manifestación de la parte actora que nunca le fueron notificados dichos actos administrativos, desconociendo su contenido, resultaba obligación para las autoridades, al contestar la demanda, demostrar su existencia mediante la exhibición de los citados documentos públicos, conforme al segundo párrafo del numeral 36 de la Ley de Justicia Administrativa, atento a la solicitud previa que presentó la demandante, a efecto que ésta estuviera en condiciones de combatirlo mediante ampliación de demanda y, al no hacerlo de esa manera, procede declarar la nulidad lisa y llana de los actos reclamados, ello con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 74, en relación con la fracción II del diverso ordinal 75, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al emitirse en contravención a las disposiciones legales aplicables.

Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011, visible a fojas 2645 dos mil seiscientos cuarenta y cinco del Libro III, Tomo 4 cuatro, diciembre de 2011 dos mil once, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. *Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto*



administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contradicción de tesis 169/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.”

En consecuencia, al acreditar la ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 74, en relación con el diverso artículo 75, fracción II, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se declara la nulidad del Requerimiento con número de folio M618004134408, al tener su origen en un acto que ha sido declarado nulo y, por tanto, no pueden surtir efecto legal alguno, atento a lo establecido en la Jurisprudencia publicada con número de registro 252103, página 280 doscientos ochenta, Volumen 121-126, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”

VI.- Por otro lado, respecto al pago de derechos por refrendo anual de placas vehiculares por los ejercicios fiscales de los años 2016 dos mil dieciséis al 2020 dos mil veinte, al haberse decretado el sobreseimiento respecto a los años 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED], y de los años 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, al haberse decretado el sobreseimiento respecto al año 2018 dos mil dieciocho, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED], emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la parte actora argumenta en su cuarto concepto de impugnación que *los actos impugnados son ilegales al violar los principios de equidad, proporcionalidad establecido en el numeral 31 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se pretende cobrar una tarifa distinta por servicios análogos.*

Por su parte la autoridad demandada, señala que *la prestación del servicio de la expedición del refrendo de tarjeta de circulación y holograma para un*



automóvil, motocicleta o de placas de denotación, es completamente diverso, ya que le implica al Estado un despliegue técnico distinto, en cada hipótesis, por lo cual es completamente legal y constitucional la diversificación de los cobros de los derechos multicitados.

Analizados los argumentos expuestos por las partes, se determina que le asiste la razón a la actora, en razón que el numeral 31 Constitucional, en su fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por su parte, el artículo 44 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y el numeral 2 del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, establecen lo siguiente:

*“Artículo 44. Todo vehículo para transitar u ocupar la vía pública, deberá contar con los requisitos y condiciones requeridas de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y su reglamento; para ello **deberán estar inscritos en el registro estatal, en ese caso, deberán portar los elementos de identificación conforme a su tipo y características; tales como placas, tarjeta de circulación, holograma de verificación vehicular** y constancia o póliza de seguro vial vigentes que garantice los daños y perjuicios contra terceros.*

Dichos documentos deberán permanecer inalterables e inmodificables, así como evitar colocar cualquier medio que impida su correcta visualización, según sea el caso.

En el caso de los vehículos de transporte público, en sus distintas modalidades, además de los documentos antes señalados, las unidades deberán portar los rótulos y colores que los identifiquen como prestadores del servicio de que se trate.

Todo conductor deberá portar la licencia o permiso para conducir vigente, de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate y conforme a la clasificación establecida en la presente ley y su reglamento”.

*“Artículo 2. **El Registro Estatal de Movilidad y Transporte, es la base de datos del Ejecutivo del Estado, en donde se administra, reúne y procesa la información relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, permisos, concesiones, autorizaciones, registros de contratos de subrogación, registros de vehículos del servicio particular y del servicio público del Estado de Jalisco y las modificaciones que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las mismas.***

De igual forma es responsable del registro de las cédulas de notificación de infracción y foto infracciones instauradas tanto por el personal de la Policía Vial de la Fiscalía, por los equipos o sistemas electrónicos, así como en las que en su caso, asuma por la coordinación que celebren con los ayuntamientos, actas de alcoholimetría, actas de accidente vial y las demás que por su importancia o trascendencia le instruya el Secretario.

El Registro Estatal de Movilidad y Transporte, forma parte integrante de la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.”

Del primer precepto transcrito, se advierten los requisitos con los cuales debe contar todo vehículo automotor para ocupar y transitar en la vía pública, entre los cuales, el estar inscrito en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte.

Por su parte, del segundo artículo citado se desprende, que el registro estatal forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y tiene como función administrar, reunir y procesar la información



relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, permisos, concesiones, autorizaciones, registros de contratos de subrogación, registros de vehículos del servicio particular y del servicio público del Estado de Jalisco, así como inscripción de las modificaciones en la información aludida y los derechos constituidos sobre ellas.

Ahora bien, las normas que se estiman violatorias, esto es, los numerales 23 de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de los años 2018 dos mil dieciocho al 2020 dos mil veinte y 24 para los ejercicios fiscales 2016 dos mil dieciséis y 2017 dos mil diecisiete, establecen los montos respecto del pago de derechos por el servicio de refrendo anual de placas vehiculares, los cuales son diferentes por cuanto a las motocicletas y los automóviles, camiones, camionetas tractores automotores y remolques, siendo más elevado el pago de éstos últimos.

En ese tenor, se concluye que la actividad realizada por el Estado a través del Registro Estatal de Movilidad y Transporte consiste en la gestión y administración de la información, entre otros, de los vehículos automotores de uso particular registrados ante esa institución, por tanto, al establecer un costo diverso para el refrendo de automóviles, motocicletas y placas de demostración, respecto a un mismo servicio prestado, como lo es la gestión y administración de los datos de vehículos automotores, así como el otorgamiento de la tarjeta de circulación y holograma, que hacen constar la convalidación del registro, violenta el principio de equidad tributaria, toda vez que el costo erogado por el Estado para proporcionar el servicio descrito es el mismo, puesto que no se advierte que el despliegue sea distinto para cada uno de los diversos tipos de vehículos.

Cobra aplicación al presente criterio, lo determinado por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la Contradicción de Tesis 20/2017, dando lugar a la Jurisprudencia PC.III.A. J/41 A, visible en la página 1811 del Libro 54, Tomo II, mayo de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que resulta de aplicación obligatoria para esta Sala Unitaria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, donde concluye con la inconstitucionalidad de las normas que son de idéntico contenido a la que hoy se reclama, al resultar violatorias a los principios consagrados en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a saber:

“DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan



determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.”

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción II y 75 III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **se declara la nulidad** del cobro de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto de los ejercicios fiscales de los años 2016 dos mil dieciséis al 2020 dos mil veinte y sus accesorios, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED], y de los años 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte y sus accesorios, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED], quedando a salvo las facultades de la autoridad fiscal, para que, de estimarlo, realice el cobro únicamente de la contribución, debiendo en todo caso aplicar la cuota mínima prevista para las motocicletas en los numerales 24, fracción III, inciso b), de las Leyes de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de los años 2016 dos mil dieciséis y 2017 dos mil diecisiete, artículo 23 fracción III, inciso b) respecto a las Leyes de Ingresos del Estado, para los ejercicios fiscales del año 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve y arábigo 23, fracción III Bis del año 2020 dos mil veinte.

Con respecto a la prescripción del cobro de Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma del año 2015 dos mil quince, resulta inatendible, tomando en consideración que el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece la facultad de la autoridad fiscal estatal de declarar o reconocer la prescripción de una obligación ante la Hacienda del Estado y los créditos a favor de éste, junto con sus accesorios, al transcurrir el término de cinco años, contados a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos, sin que se realicen gestiones de cobro, es decir, al corresponder a una de las facultades de la autoridad estatal, ya sea de oficio o a petición de parte interesada, corresponde al promovente solicitar, en primera instancia, en sede administrativa la declaratoria o reconocimiento de la prescripción alegada, sin que con ello se contravenga lo dispuesto por el numeral 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, respecto a la opción de agotar los recursos o medios de defensa ante la autoridad o promover el juicio administrativo, en la inteligencia que la declaración o reconocimiento de prescripción a que alude el tercer párrafo del citado artículo 90 del Código Fiscal, no resulta un medio de defensa sino una petición a la autoridad de realizar dicha declaratoria o reconocer que ha prescrito el término para hacer efectivo el crédito fiscal, de lo contrario, **no se estaría frente a un acto definitivo**, entendiéndose éste como la resolución expresa o ficta, con la que se refleje el producto final o la



voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o, bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial.

Ahora bien, la prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad, derivada de no ejercer su facultad económica coactiva, de modo que bajo esta tesitura, una vez consumado el término de 5 cinco años para que se actualice la figura de la prescripción, el contribuyente podrá hacerla valer de dos formas: **vía acción**, ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o; **vía excepción**, cuando se pretenda cobrar por la autoridad fiscal, a través de los medios de defensa correspondientes, entre ellos el juicio de nulidad, aun cuando la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción haya realizado un acto de cobro y éste no haya sido impugnado por el deudor, ya que la prescripción no se encuentra condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad en que se consumó el plazo referido.

Por otro lado, la competencia de esta Sala Unitaria para conocer sobre actos emitidos por las distintas autoridades que afecten intereses de los gobernados, se encuentra constreñida a los supuestos de procedencia previstos en el artículo 4, numeral 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, a saber:

“Artículo 4. Tribunal - Competencia

1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales:

I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales:

a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable;

b) Sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados por autoridades estatales o municipales;

c) Que impliquen una afirmativa ficta, en los términos de la legislación aplicable;

d) Que sean favorables a un particular, cuando la autoridad estatal o municipal promueva su nulidad;

e) Derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales y cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales;

f) Que determinen la existencia de una obligación fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable, y en caso de obligaciones fiscales determinadas conforme a las facultades delegadas a las autoridades estatales por autoridades fiscales federales se estará a lo dispuesto en la normativa federal correspondiente;



g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las bases para su liquidación, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

h) Que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

i) Que cause un agravio en materia fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación aplicable;

j) Que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante, y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la legislación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado;

k) Que constituyan créditos fiscales, por responsabilidades de los servidores públicos estatales o municipales, cuando sean considerados como definitivos; o

l) Que determinen una responsabilidad ambiental, de competencia estatal, en los términos de la legislación aplicable;
(...)"

De las hipótesis antes enlistadas, se desprende la procedencia del juicio únicamente en contra de resoluciones definitivas en materia fiscal, luego entonces, la simple actualización de la figura de la prescripción por el transcurso del término previsto en la norma, no resulta por sí sola una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio administrativo, sin que el contribuyente que afirma que aquella ha operado a su favor, solicitara ante la autoridad fiscal que la declare o reconozca o, en su defecto, que la demandada intentara hacer efectivo el cobro del crédito fiscal, en consecuencia, esta Sala Unitaria no puede pronunciarse sobre la prescripción del crédito fiscal en comento, no obstante, se deja a salvo el derecho del actor para solicitar su actualización ante la autoridad administrativa.

Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia 2a./J. 80/2017 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 404/2016, consultable en la página 246 doscientos cuarenta y seis del Libro 44 cuarenta y cuatro, Tomo I, julio de 2017 dos mil diecisiete, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

“PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a



normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador.

Contradicción de tesis 404/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 26 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.”

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción IV, 30, fracción I y último párrafo, 72, 73, 74, fracciones II y III y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve a través de los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo, únicamente por lo que ve a los créditos fiscales números 13004376677 y 15004086793 generados por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de los ejercicios fiscales 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce, y sus accesorios, respecto al vehículo con número de placas [REDACTED] y el diverso 18004513169 generado por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del año 2018 dos mil dieciocho y sus accesorios, respecto al vehículo con número de placas [REDACTED], al resultar extemporánea la presentación de la demanda, atento a los motivos y consideraciones legales que se desprenden del Considerado III de la presente resolución.

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas no justificaron sus excepciones y defensas, en consecuencia;

TERCERO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de números de folio 172261582, 172827993, 221570820, 222387191, 223688241, 223856373, 228705969, 231827102, 201042313, 243454930, 237757270, 238601746, 254072850, 254084654, 254126918, 201838762, 263862562, 267486310, 207778494, 301824211, 271400942, 271647271, 293708770, 302329508 y 273204881, emitidas por la Secretaría de Seguridad y



Secretaría del Transporte, ambas del estado de Jalisco, respectivamente, así como del cobro de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto de los ejercicios fiscales de los años 2016 dos mil dieciséis al 2020 dos mil veinte y sus accesorios, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED], y de los años 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte y sus accesorios, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED], así como del Requerimiento con número de folio M618004134408, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, por lo que se ordena a las demandadas la cancelación de los mismos, emitiendo acuerdo correspondiente y realizando las anotaciones correspondientes en las bases de datos o sistemas respectivos, informando y acreditando su debido cumplimiento ante esta Sala Unitaria, atento a los motivos y fundamentos legales expuestos en el último Considerando de la presente resolución.

En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de Ley con fundamento en lo establecido en el numeral 72 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de ésta se haga en el Boletín Electrónico de éste Órgano Jurisdiccional publicado en la página electrónica www.tjajal.org con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

MAGISTRADO PRESIDENTE

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS

LLV/POC/mavc

La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en



Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.-----